EDITA: **HERALDO DE ARAGÓN EDITORA, S. L. U.**
Presidenta Editora: Pilar de Yarza Mompeón
Vicepresidente: Fernando de Yarza Mompeón
Director General: José Manuel Lozano Orús

Director: Miguel Iturbe Mach
Subdirectores: Encarna Samitier (Opinión), Ángel Gorri (Información). Redactores Jefe: Enrique Mored (Aragón), Santiago Mendive. Jefe de Política: José Luis Valero. España, Mundo y Economía: José Javier Rueda. Deportes: José Miguel Tafalla. Cultura: Santiago Paniagua. Internet: Esperanza Pamplona. Cierre: Mariano Gállego.

Gerente: José Andrés Nalda Mejino
Comercializa: Metha. Gestión & Medios, S. L.
Imprime: Impresa Norte, S. L.
Distribuye: DASA. Distribuidora de Aragón, S. L.

LA FIRMA | DEBATE SOBRE LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

Aunque en España los niveles de corrupción pública son bajos, se centran en el nivel político y forman una lacra dañina que hay que combatir restaurando y reforzando los órganos de control presupuestario y de la legalidad

Por Reyes Palá Laguna, profesora de Derecho Mercantil

Vigilar al vigilante

KRISIS'13

EL mayor daño que podemos hacer a nuestra democracia es el de no luchar contra la corrupción. Dicho esto, España es un país con unos niveles de corrupción pública bajos, sin perjuicio de que esta deba ser denunciada y sancionada con todo rigor. Es más, en los niveles profesionales de nuestras administraciones públicas, como en la judicatura, los casos de corrupción son extremadamente raros. Fuera de este ámbito, tampoco es fácil enterarse de que alguien, gracias a un soborno, se haya librado de una multa de tráfico, de un paciente que haya sido adelantado indebidamente en una lista de espera quirúrgica o de un estudiante que haya obtenido un aprobado en una titulación universitaria o en una oposición por motivos espurios.

Casi invariablemente, los casos de corrupción conocidos se dan en el nivel político. De la financiación ilegal de los partidos políticos como algo tolerado por las propias organizaciones –y, en algún momento, no demasiado mal visto por amplias capas de votantes– se ha pasado, de forma natural, a la financiación ilegal de las necesidades privadas de algunos políticos. Generalizada una forma de actuar ilegal, es difícil garantizar que los fondos irán a la organización y no a sus miembros. En muchos casos, este desvío de fondos opacos se ha hecho con la supuesta coartada moral de que en política «se cobra poco» en proporción a las responsabilidades que se asumen, olvidando que, en muchos casos, hay una manifiesta desproporción entre la capacidad profesional de quien ocupa el cargo político y la relevancia de las responsabilidades inherentes al mismo. La lucha contra la corrupción debe llevar a una mayor profesionalización de la Administración, es decir, de sus puestos directivos, suprimiendo la designación discrecional de puestos funcionariales y eliminando a los asesores que, en el mejor de los casos, funcionan como una Administración paralela o, en el peor, el supuesto asesor se transforma en un liberado al servicio del partido, con escasa o nula carga de trabajo pero que cobra a nuestra costa.

Si bien no puede negarse la existencia de muy significativos casos de corrupción en algunas administraciones autonómicas, provinciales o incluso en la Administración General del Estado, el ámbito en el que existe mayor corrupción es el municipal. El desmontaje, especialmente a partir de 1985, en nombre de la autonomía local, de los controles administrativos externos sobre los ayuntamientos y la neutralización de facto de los controles de la legalidad y presupuestario que ejercían de forma eficaz secretarios e interventores están muy probablemente en el origen de la corrupción. Secretarios e interventores siguen siendo funcionarios de habilitación nacional, seleccionados en virtud de oposiciones rigurosas y exigentes, pero de un sistema de adjudicación de las plazas puramente reglado hemos pasado a otro de libre designación, lo que, unido a la posibilidad concedida a la propia entidad local de subir –o bajar– significativamente las retribuciones de estos funcionarios, puede utilizarse para intentar influir en sus decisiones. Un funcionario juzgado excesivamente riguroso puede ser inducido a buscar otro destino y ser sustituido por otro más flexible o por un interino al que se considere más factible presionar. Junto a mayores medios para los organismos de control externo –Tribunal de Cuentas nacional o cámaras de cuentas autonómicas–, es preciso blindar a los funcionarios encargados del control interno para que puedan ejercer adecuadamente su labor, de manera que su sueldo no quede al albur del responsable político cuya actuación debe controlar. Su situación profesional no puede depender en última instancia de la decisión del alcalde, quien puede premiar su falta de celo o, al contrario, castigarla y, en represalia, reducirle el sueldo o nombrar a otro menos exigente.

«Una Administración pública moderna tiene que basarse en un sistema de contrapesos y controles que dificulten el abuso y la ilegalidad»

Tampoco en términos macroeconómicos, de cantidad de dinero que se mueve respecto a nuestro PIB, la corrupción política española es significativa. Pero los efectos desmoralizadores de la corrupción pueden ser devastadores. Si para un puesto de responsabilidad no se selecciona al funcionario mejor preparado, si un servicio público no se le encomienda a la empresa más solvente y con mayor experiencia o la construcción de una obra pública, a la empresa técnicamente mejor, sino a quien ha pagado un soborno o, simplemente, goza de mejores relaciones personales o políticas, desaparece uno de los principales incentivos para ser eficaz y solvente técnicamente. Es más, el eficaz y solvente corre el riesgo de ser expulsado del mercado. Por ello, combatir la corrupción no es sólo un imperativo moral, sino una cuestión que afecta a la vida cotidiana de cada uno. Para ello no basta –aunque pueda ayudar y mucho– la regeneración moral. Si existen resquicios legales, alguien los utilizará en su provecho. Una Administración pública moderna tiene que basarse en un sistema de contrapesos y controles que dificulten el abuso y la ilegalidad y que aseguren su detección y castigo cuando surjan. Al final, siempre se trata de dar una respuesta adecuada a la clásica pregunta: 'quis custodiet ipsos custodes?', ¿quién vigilará a los vigilantes? Alguien, evidentemente, que no ceda a la corrupción.

HOY, MARTES 19

Santiago Mendive

LA DERIVA DE RUBALCABA

LA visita de Alfredo Pérez Rubalcaba a Zaragoza no ha servido para aclarar cuáles son sus verdaderas intenciones a dos años de las próximas elecciones generales. Es el secreto mejor guardado de un secretario general que cometió el primer error al aceptar seguir liderando el PSOE pese a protagonizar en 2011 un histórico fracaso electoral, con un descenso del 38% y apenas 7 millones de votos. La verdadera extrañeza reside, en efecto, en el empecinamiento político de un hombre que, lejos de impulsar las siglas por las que trabaja, se mueve según las últimas encuestas por debajo de los 100 diputados. Una sensación que ya ha calado hace demasiado tiempo en las filas socialistas y en los propios barones, divididos ante una estrategia que algunos líderes regionales consideran suicida. El último episodio, el papelón jugado en Ponferrada, solo ejemplifica la falta de liderazgo y la confusión interna, en un momento en el que el Partido Popular se encuentra tocado por el caso Bárcenas y ha acusado el desgaste de sus cuestionadas medidas ante la crisis. Rubalcaba solo anunció ayer cambios organizativos tras el fiasco de León: un remiendo epidérmico ante un problema abisal.

CON DNI

Ramón J. Campo

El cáncer y la vela

LA última Encuesta Nacional de Salud del Instituto Nacional de Estadística ha demostrado que funciona muy bien el programa de prevención en el cáncer de mama gracias a las mamografías, pero España suspende en el tumor colorrectal. Tres de cada cuatro mujeres entre 50 y 69 años se han hecho las pruebas en los dos últimos años, pero un 89% de la población nunca se ha hecho una prueba de sangre en heces para evitar el cáncer de colon.

El mecano del cáncer tiene muchas piezas y la prevención es fundamental para combatirlo. Pero otra vía es la investigación, como la que encabezan los aragoneses Carlos López-Otín (Sabiñánigo, 1958) y Elías Campo (Boltaña, 1955), quienes detienen el efecto de la leucemia linfática crónica con sus descubrimientos constantes.

Ayer me contaron que su hallazgo era un gen nuevo (el POT1) y un mecanismo nuevo (no protege el cromosoma y se queda sin capa protectora). Es de un enorme interés científico, sostiene López-Otín; porque la intervención terapéutica podría ayudar a tratar a un grupo de pacientes cuyas perspectivas clínicas son hoy muy desfavorables, apunta Campo.

Consultar a estos dos adalides brillantes y humildes investigadores cualquier duda sobre el cáncer es como un viaje en el Plan Genoma que puede cambiar nuestra vida en el siglo XXI. Pero a veces hay preguntas que tienen respuestas cálidas sin salida.

Mi abuela murió de un cáncer de mama en 1933, cuando las mamografías preventivas eran todavía un futuro muy lejano y casi inimaginable. Mi madre ha contraído el cáncer de ovario, pero el hallazgo llegó tarde para atajarlo, como ocurre con los de colon agresivos. Entre abuela y madre, la línea materna de un gen de predisposición a cáncer de mama u ovario queda lejos, opina López-Otín. Lo que más profundamente nos queda de los últimos días es la compañía y la atención mas cariñosa, advirtió Elías Campo, al pie de camas de pacientes. Sara y mi madre lo agradecen. El freno del tumor es prevenir e investigar, pero muchas veces aún es acompañar, querer, pasear, escribir, recordar y hablar de toda una vida que se evapora como una vela.